



LAS RELACIONES CON COLOMBIA DESPUES DEL TIEMPO DE CUARESMA

Las recientemente perturbadas relaciones con Colombia, por el grave incidente de Cararabo, parecen entrar en un nuevo proceso de normalización, demostrando de esta manera que son más importantes de lo que algunos piensan. Seguramente, ha sido propicio el tiempo de cuaresma y la conversión de Pascua para apreciar la importancia de integración económica donde existe un intercambio comercial, con un balance favorable a nuestro país. En tal sentido, según informaciones recientes, se indica que, a pesar de los problemas económicos de Venezuela y de la reciente crisis fronteriza, el intercambio comercial y de inversión entre las dos naciones mantiene su tendencia indetenible. No obstante, continúa presentándose para muchos sectores de este país la incógnita en relación a qué es Colombia.

Nuestro vecino, en su evolución geohistórica, presenta rasgos distintivos resaltantes del resto de los países latinoamericanos: fue el líder exportador de oro del mundo mucho antes de que se produjeran los descubrimientos de California y Australia en el siglo XIX; ha sido comparado con el «Tíbet» por su modo de vida enclaustrado en las altas cumbres andinas; el apartado mundo andino estableció sus vínculos exteriores preferentemente por intermedio del río Magdalena, su principal camino de comunicación; de los países sudamericanos, es el único que tiene salidas por el océano Pacífico y el mar Caribe; su formación demográfica prácticamente no ha sido alterada por los movimientos migratorios que han impactado otros países americanos como, por ejemplo, Estados Unidos y Argentina; por el contrario, los colombianos, son considerados como los «judíos del Continente» por sus diferentes diásporas conducentes al establecimiento de colonias en diferentes países del mundo; Colombia, con todas sus imperfecciones y excesos, es la más antigua y persistente democracia en América; se ha caracterizado por mantener un Estado débil, por cuanto las oligarquías dominantes no se han visto

precisadas a transferir parcial o totalmente su poder de control nacional a un ente jurídico abstracto.

Desde principios de siglo se presentaron las condiciones para una gran revolución agraria, pero ésta ha sido detenida por una cruenta contrarrevolución dirigida por las oligarquías. La ignición revolucionaria se inició con los grupos de autodefensa campesina, pero el fanatismo político fue ampliando el espectro macabro de la violencia hasta alcanzar modalidades inimaginables de salvajismo. Para evadir la Reforma Agraria, los «cachacos», desde Bogotá, toleraron la colonización interna, que en la práctica contribuyó a la ampliación de las fronteras de la violencia, en un proceso caracterizado por la colonización y el conflicto permanente. El fenómeno se manifestó en las ciudades, y en las últimas décadas, como corolario, también el narcotráfico se encuentra estimulando la violencia, la cual parece no tener fin.

Indudablemente, para los venezolanos debe suscitar gran interés el conocimiento de los factores que han generado el síndrome de la violencia en el hermano país en momentos en que este preocupante comportamiento social se evidencia con crudeza a diferentes niveles a lo largo de nuestro propio territorio nacional.

MEDIO SIGLO DE VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA

Ante la gran crisis del capitalismo mundial surgida en 1929, la respuesta colombiana fue la «Revolución en Marcha», dirigida por el gran jefe civil liberal Alfonso López Pumarejo, quien pensó que «las fronteras tradicionales de los grandes partidos [habían] sido superadas». Pero la «revolución» no logró quebrar el poder tradicional de los barones del café, como sucedió en Brasil, y por el contrario, para poder seguir manteniendo un Estado débil, utilizaron el de su enorme vecino para buscar una nueva inserción en el mercado internacional del café. Después de algunos

años, en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el país tenía diez millones de habitantes, y los eventos internacionales se vincularon con el conflicto político nacional surgido por la crisis del partido liberal. Esta se origina durante el segundo gobierno de López Pumarejo, y para detener el golpe militar las élites designan a Alberto Lleras Camargo. En las elecciones de 1946 el Partido Liberal participa dividido en dos facciones: una oficial, con Gabriel Turbay, y la otra contestataria, con Jorge Eliécer Gaitán, quien sostenía un discurso nacionalista y populista. Decía: «yo no soy un individuo sino un pueblo». En la contienda triunfan los conservadores con Mariano Ospina Pérez, y se inaugura el ciclo de los gobiernos minoritarios que mandan mediante el estado de sitio, la supresión de las garantías constitucionales y la llamada «legalidad marcial». Se inicia el ciclo de la Violencia, que cobró cerca de 300 mil vidas y alcanzó su momento más cruento en Bogotá, el 9 de abril de 1948, con el asesinato de Gaitán, frustrando la revolución social. En la cresta de la sublevación popular, cuando muchos conservadores vacilaban, doña Berta, la esposa de Ospina, le dijo: «es mejor un presidente muerto que un presidente fugitivo». En las elecciones de 1950 gana Laureano Gómez, quien intenta incorporar ciertos principios del franquismo como la sustitución del voto universal por el sufragio calificado de familia y gremios, además de negar radicalmente la tradición liberal de las constituciones republicanas. En 1953 se produce el golpe de estado del General Rojas Pinilla, con el pretexto de terminar con la violencia bipartidista. Pero pronto surgen entre la oligarquía los temores por «las dictaduras militares tipo Caribe», y el dictador concreta estos temores al amordazar los periódicos, estimular la creación de un tercer partido político y generalizar la represión como ocurrió en la masacre en la Plaza de Toros de Santa María.

En 1957, en España, se firma el Pacto de Benidorm entre los dos partidos para retomar el hilo cons-

Alejandro Mendible Z.

titucional y superar la violencia. De esta manera se da inicio al Frente Nacional, que se convalida mediante un plebiscito nacional. El Frente se prolonga como la política dominante del país hasta 1978, y en el período se suceden de manera alterna en la presidencia liberales y conservadores empezando por Alberto Lleras Camargo y seguido por Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero y el gobierno de transición de Alfonso López Michelsen. En este ciclo, uno de los de mayor duración en la vida política colombiana, la violencia tradicional se redefine y encuentra nuevas expresiones. Por una parte, el Frente frustró las expectativas de cambio social, forzando a que las nuevas contradicciones se manifestaran de manera violenta a través de nuevas tendencias de diferentes orientaciones políticas. Por ejemplo, el Frente Unido, liderizado por el sacerdote Camilo Torres, tomó la vía guerrillera. ANAPO, y concretamente su desprendimiento, el M-19, también lo hacen después de las elecciones de abril de 1970, cuando el supuesto triunfo electoral le fue esquilimado a Rojas Pinilla, para imponer en la presidencia al conservador Pastrana Borrero. Por el contrario, López Michelsen, con su Movimiento Revolucionario Liberal, después de adversar al gobierno se convierte en presidente en 1974, poniendo en evidencia el alto grado de manipulación del sistema bipartidista.

También en el período, en el plano insurreccional se presentan los primeros síntomas de bandolerismo político, así como de nuevas modalidades de lucha de autodefensa en la región del Tolima, donde surgen las «repúblicas independientes» del Viola y de Marquetalia. Estos primeros ensayos comunistas, fueron arrasados por el ejército durante la presidencia de Guillermo León Valencia, quien aplicó el plan LASO, apoyado por Estados Unidos.

Después del Frente, surge un nuevo juego entre los dos partidos y se emplean diferentes prácticas

militares para combatir la insurrección. La manifestación guerrillera en Colombia es la más antigua de América Latina y cuenta con diferentes proposiciones. Las de mayor significación son tres. La más antigua y mejor organizada es la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); su líder sentimental continúa siendo Pedro Antonio Marín, alias «Tirofijo», de 81 años de edad y de filiación pro comunista. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado en 1965, cuyo líder es el exsacerdote Manuel Pérez, alias «Poliarco», es señalado por los analistas como el más violento de los grupos en armas, al punto de que la revista «Semana», de Colombia, comenta que esta guerrilla ha llegado al extremo de cobrar por devolver el cuerpo sin vida de un secuestrado. La tercera en importancia es el Ejército Popular de Liberación (EPL), fundado en 1967, de tendencia maoísta.

El primer presidente después del Frente es Turbay Ayala, liberal, quien gobernó entre 1978 y 1982. Su administración se inclinó por la «alternativa represiva», buscando una salida al problema político; en

la práctica estableció una democracia restringida. Después, le sucedió en la magistratura Belisario Betancourt, conservador, quien gobernó hasta 1986. Esto dio un cambio de orientación, haciendo énfasis en la política de pacificación, y fue uno de los primeros propulsores de los diálogos por la paz con los grupos en armas. Los logros obtenidos resultan discutibles: se desmovilizan el M-19, el Quintín Lama, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y una disidencia del Ejército de Liberación Nacional. Pero, las FARC crearon un partido político legal, La Unión Patriótica (UP), proyecto que fracasó al ser liquidados dos mil líderes de esta organización en menos de dos años, haciendo que la agrupación prácticamente desapareciera y evidenciando la existencia de un tético Estado terrorista.

La guerra revolucionaria continúa durante la presidencia del liberal Virgilio Barco. Pero, también, irrumpe de manera inusitada la violencia instigada por los carteles de droga, en especial el de Medellín. El asunto llegó a convertirse en un tema álgido en las relaciones con Estados Unidos, quien impuso un

«Proyecto Antidrogas», cuya finalidad consistía en golpear los intereses de los productores de cocaína colombianos, mediante su extradición y sometimiento a juicio en los tribunales de ese país. La medida tuvo efectos sobre el sensible sentimiento nacionalista colombiano y amplió las repercusiones desestabilizadoras del narcotráfico en la seguridad y orden público, al punto que el presidente tuvo que reconocer que el país vivía en una «verdadera orgía de la muerte». La lista de asesinados por los sicarios, asesinos profesionales, pagados por los carteles, es impresionante, no sólo por el número, sino por su representatividad: Guillermo Caro, director del periódico El Espectador; Rodrigo Lara Bonilla, Ministro del Interior; y los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo, de la Unidad Popular (UP), Carlos Pizarro, del M-19, y, como trofeo macabro, Luis Carlos Galán, candidato presidencial del partido Liberal, en agosto de 1989. Las magnitudes de peligro representado por el narcotráfico para la sociedad colombiana, donde el 47% de ella vive en condiciones de pobreza, pueden inferirse por la

Plaza Bolívar de Santa Fe de Bogotá



lectura de fuentes confiables que señalan: entre uno y dos y medio millones de empleos directos, así como sumas fabulosas en millones de dólares de ganancia por sus actividades ilícitas.

El actual presidente Ernesto Samper sucede a César Gaviria, quien representó un importante cambio generacional y creó la sensación de una nación en movimiento. Pero Samper asume la primera magistratura en medio de un escándalo internacional creado por la supuesta ayuda económica para su campaña electoral por el narcotráfico. Un año después, la denuncia la han reactivado los parlamentarios republicanos en Estados Unidos como un argumento para su próxima campaña presidencial. De esta manera, en reciente artículo, el senador Jesse Helms publica en *The Wall Street Journal* que Colombia «se ha transformado indiscutiblemente en una narcodemocracia». Por otra parte, el gobierno continúa negociando con los guerrilleros en armas sin que esto signifique el cese de la guerra. Hasta el presente lo que se ha podido conseguir es la ratificación de los Convenios de Ginebra en un intento por humanizar el conflicto. La recuperación económica parece continuar ignorando el apaciguamiento de la violencia.

VIOLENCIA CONTRA VENEZUELA

Nuestras fronteras terrestres tienen una extensión de 4.800 km, de los cuales 2.050 son con Colombia. La demarcación de estos confines y de los que todavía faltan por demarcar en el Golfo de Venezuela, ha sido el problema de mayor importancia internacional que haya tenido el país y también el que en mayor grado ha incidido en la opinión nacional, como puede ser constatado por la larga y variada bibliografía existente sobre el tema. Como elementos de unión entre los dos países se destacan su común historia, sus intereses económicos tan cercanos e independientes unos de otros, su fisonomía política y social tan seme-

jante y, sobre todo, la circunstancia de su vinculación por la memoria del Libertador. Pero se les antepone, para separarlos, los brotes nacionalistas, así como un creciente cúmulo de hechos discordantes, tales como la guerrilla, el narcotráfico, la migración incontrolada, etc. Estas últimas causas constituyen, en el presente, las fallas donde se generan los cíclicos movimientos sísmicos que estremecen la opinión pública y las buenas relaciones entre los dos países.

También las desavenencias tienen sus antecedentes históricos que se remontan, entre otras, a la disolución de la Gran Colombia en 1830, a la falta de reconocimiento del Acuerdo entre Santos Michelena y Lino Pombo en 1833, y al laudo Arbitral desfavorable para Venezuela en 1891, acompañado por la afrenta, según el historiador Pablo Ojér, de la incursión naval en el Golfo de Venezuela por el vapor de guerra, «La Popa». En general nuestro país resultó desfavorecido hasta la muerte de Gómez en 1936, por el contraste señalado por el poeta Andrés Bello en el sentido de que, «Colombia era una Universidad, Venezuela era un cuartel».

Igualmente durante el presente siglo, otros eventos importantes se han sumado para mantener la animosidad contra Colombia: la firma del Tratado de Límites de 1941, que al ser discutido en el Capitolio, motivó la protesta de los parlamentarios, por lo que denominaron una «política de puerta cerrada». Después, el incidente de los Monjes en marzo de 1952, cuando los servicios de inteligencia venezolanos se posesionaron del «Plan D-3 Operaciones del Estado Mayor de Colombia», elaborado por el Teniente Gustavo Rojas Pinilla, lo que ocasionó la movilización militar venezolana en la «Operación Caimán» para mantener la soberanía en el estratégico punto del Golfo de Venezuela.

Después de 1958, vale destacar los incidentes de Caraballeda, el de la Corbeta «Caldas» y la actual confrontación creada por la

masacre de Cararabo. En la primera, en el caso de la hipótesis de Caraballeda, en octubre de 1980, la opinión pública actuó como grupo de presión, participando de forma decisiva al rechazar la Propuesta del Gobierno de Luis Herrera Campins. En esa oportunidad, los diferentes sectores nacionales manifestaron, y en particular las Fuerzas Armadas, que el Golfo es uno de los principales objetivos del interés nacional. En agosto de 1987 fue la incursión de la corbeta «ARC Caldas». En esa oportunidad, según los analistas venezolanos, el gobierno colombiano perseguía descongelar e internacionalizar el problema del diferendo del Golfo, que para esa fecha se encontraba totalmente paralizado. En la respuesta venezolana se observa la unidad solidaria de todos los sectores de la vida pública y privada, y se destaca la actitud militar en la «Operación Leopardo», mediante la cual, en 48 horas, movilizaron 40 mil hombres para fortificar la frontera. En esa oportunidad fue especulada la «extraña» coincidencia de que, mientras la corbeta zarpa de su Base Naval de Cartagena, el Ministro de la Defensa venezolano atendía en Bogotá a una invitación de su homólogo colombiano y era condecorado con la Orden de Boyacá. Esta situación dio margen a los medios de comunicación de Colombia, posiblemente para aminorar la gravedad del incidente, para señalar que todo había sido prefabricado por los ministros de Defensa de los dos países, en connivencia con los fabricantes de armas. Lo que sí es una realidad inculcable es que posteriormente fueron destapándose grandes escándalos de corrupción, como el de la repotenciación de las fragatas, de los tanques AMX y los Mirages.

En la masacre de Cararabo la acción de la guerrilla colombiana desafía la soberanía nacional, para crear desestabilización en las relaciones entre los dos países. Los efectos del evento no han terminado todavía. Sin embargo, puede destacarse que, a diferencia de las anteriores crisis, en esta oportuni-

dad la movilización militar venezolana buscó la reciprocidad del ejército colombiano, lo que eventualmente permitirá ampliar la cooperación militar en la frontera. Además, el incidente abre algunas expectativas inciertas en relación al incremento de las relaciones que se venían desarrollando desde 1989, las cuales eran destacadas en la región como muy exitosas. Merece comentario aparte el que la situación planteada se produce cuando la tasa de crecimiento económico de Colombia se encuentra por encima del demográfico, contrastando de manera significativa con la tendencia adversa en Venezuela.

En el plano económico, las relaciones entre los dos países se encuentran en un nivel satisfactorio, como lo indican la fusión de los bancos Unión de Venezuela y el Ganadero de Colombia y las compras de los mercados CADA y las tiendas Maxys.

El incidente de Cararabo, por lo menos a nivel gubernamental, parece superado con la firma de la Declaración de Mérida, a finales de marzo, donde se acordó una «exhaustiva evaluación sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre ambos países». En el acto de la firma el Canciller de Colombia, refiriéndose a los enemigos de la integración, citó el verso: «podrán cortar las flores más bellas del jardín, pero jamás podrán detener la primavera». Queda pendiente lo que pudiera suceder si nos atenemos a lo expresado por el presidente Caldera en su Mensaje ante el Congreso: «si casos como el sucedido llegan a repetirse, habrá que reconocer que el derecho a la legítima defensa no puede verse obstaculizado por una línea fronteriza». Ojalá, el tiempo de cuaresma y la conversión de Pascua contribuyan a que Venezuela y Colombia continúen demostrando mayor madurez emocional que las de sus hermanos Perú y Ecuador. ■

Alejandro Mendible Z. es internacionalista, profesor de la UCV.